

La ley india sobre financiación extranjera es una "herramienta para silenciar" a la sociedad civil La Comisión Internacional de Juristas dice que la enmienda a la ley de la FCRA "obstruirá" el trabajo de las ONG en el país.

Los defensores de derechos han criticado una enmienda a la Ley de Contribuciones Extranjeras de la India (FCRA), que supervisa la financiación extranjera a las ONG, y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dijo que es "una herramienta para silenciar" a las organizaciones de la sociedad civil en la nación del sur de Asia.

En un documento informativo publicado el jueves, la CIJ afirma que la FCRA está "reduciendo severamente" el espacio civil en India y plantea obstáculos innecesarios a los defensores de los derechos humanos en India al "obstruir ilegalmente" el trabajo de las ONG en el país de 1.300 millones de habitantes.

La CIJ dijo que la FCRA "no cumple con las obligaciones legales internacionales de India de respetar y proteger los derechos a la libertad de asociación, expresión, reunión pacífica y el derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos".

La FCRA regula las donaciones extranjeras con el objetivo de garantizar que dichas donaciones no afecten negativamente la "seguridad nacional" de la India.

La ley, promulgada originalmente en 1976 con el objetivo de evitar donaciones extranjeras a partidos políticos, ha sido enmendada para matar de hambre a las ONG, en particular a los grupos de derechos humanos y las ONG medioambientales que critican al gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi. La financiación extranjera a los partidos políticos sigue siendo ilegal en India.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación en octubre de que la FCRA se estuviera utilizando para "disuadir o castigar a las ONG por informar y defender los derechos humanos.

A la CIJ le preocupa que el lenguaje demasiado amplio de la ley FCRA signifique que puede aplicarse de manera arbitraria. Considera que la ley forma parte de una "represión contra los defensores de los derechos humanos de la India" que consiste en detenciones arbitrarias y otras formas de acoso.

"Todos los gobiernos tienen el deber de prevenir la corrupción, pero la regulación financiera no debe usarse para reprimir el papel crucial de la sociedad civil simplemente porque a las autoridades les resulta difícil lidiar con las críticas constructivas", dijo a Al Meenakshi Ganguly, director de Asia del Sur de Human Rights Watch. Jazeera.

La Ley prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil acceder a un certificado FCRA basado en la prohibición de recibir fondos extranjeros para organizaciones de "naturaleza política" y actividades contra el "interés público", el "interés económico" o la "seguridad", donde estos términos no son definidos o definidos de manera demasiado amplia.

El miércoles, el gobierno indio enmendó las reglas de la FCRA haciendo más difícil para las ONG el acceso a contribuciones extranjeras. De acuerdo con las nuevas reglas, una ONG ahora tiene prohibido transferir fondos a otra ONG, la tarjeta Aadhaar, la identificación biométrica, es obligatoria para el registro y se requiere permiso previo para recibir fondos extranjeros.

"La nueva ley, junto con las nuevas regulaciones, hacen que dirigir una organización de derechos humanos en India con cualquier contribución extranjera sea extremadamente difícil", dijo a Al Jazeera Anubha Rastogi, una abogada especializada en asuntos humanos con sede en Mumbai. "La redacción de la ley asegura que el estado tiene el poder y la amplia discreción para interpretar cualquier actividad como de naturaleza política".

Greenpeace y Amnistía

La ley se ha utilizado para obstruir a la sociedad civil ya en 2015, cuando el Ministerio del Interior canceló el registro de la FCRA de Greenpeace India. A Priya Pillai, miembro del organismo de control ambiental, se le impidió volar al Reino Unido, donde se esperaba que hiciera campaña contra el uso de la minería del carbón que afecta a los pueblos indígenas.

Paralizada por los recortes de fondos, Greenpeace India se vio obligada a cerrar sus oficinas en India y despedir personal.

Desde que asumió el poder en 2014, el gobierno de Modi ha cancelado las licencias de más de 20,000 ONG que recibieron fondos extranjeros bajo la FCRA. Un informe filtrado por la oficina de inteligencia, la agencia de inteligencia nacional de India, dijo que Greenpeace y Amnesty, entre otros, estaban estancando el desarrollo.

Varios activistas, en particular los que trabajaban en sectores marginados como los dalits (ex intocables) y los tribales, han sido arrestados tras ser calificados de "simpatizantes maoístas".

En septiembre, Amnistía Internacional decidió detener su trabajo en India después de que el gobierno de derecha congelara la cuenta bancaria de su sucursal en India, lo que obligó a despedir personal y detener su trabajo en la nación del sur de Asia.

Amnistía se ha quejado del continuo acoso por parte del gobierno del primer ministro Narendra Modi. La organización de derechos con sede en Londres también acusó al gobierno de realizar una campaña de "caza de brujas incesante" contra las organizaciones de derechos humanos por acusaciones "infundadas y motivadas".

Los defensores de los derechos dicen que la FCRA tiene un "efecto paralizador" en las ONG de la India que no aceptan donaciones extranjeras por temor a entrar en conflicto con la FCRA. Según un informe de 2019, la financiación extranjera a más de 3 millones de ONG en India registró una disminución del 40 por ciento entre 2015 y 2018.

"Si bien afectará a una gran cantidad de organizaciones, dos grupos específicos de organizaciones se verán más afectados: en primer lugar, las pequeñas ONG de base que trabajan en colaboración con organizaciones más grandes u ONG, ya que la nueva enmienda ahora prohíbe la subvención a cualquier otra organización, Yamini Mishra, directora de Amnistía Internacional para el sur de Asia, dijo a Al Jazeera.

"Esto significará casi una sentencia de muerte para cientos y miles de pequeñas ONG.

"El otro grupo de grupos que se verán afectados directamente por la ley son los que se dedican a la promoción, el trabajo de investigación de políticas, la movilización de alianzas y redes", dijo Mishra.

La CIJ está pidiendo al gobierno indio que establezca un comité independiente para revisar la FCRA.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha intervenido en el asunto. Afirmó que las restricciones de la ley sobre financiación deben expresarse con un grado de precisión que permita a las personas o a una organización regular su conducta en consecuencia.

Según Mishra, Amnistía India ya ha apelado contra las acciones del estado en el tribunal superior y tiene la "intención de librar esta batalla hasta que haya una resolución final a nuestro favor".

El gobierno indio ha defendido sus acciones diciendo que las ONG han violado las reglas de financiación y algunas de ellas han incurrido en corrupción.